

Millonaria condena a Colombia

El Estado deberá reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos e indemnizar a los familiares de las víctimas en 6,5 millones de dólares.

REDACCIÓN JUSTICIA

Por tercera vez en la historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado colombiano. Esta vez lo halló responsable de la muerte de 19 comerciantes, a manos de grupos paramilitares, ocurrida en Puerto Boyacá el 6 de octubre de 1987.

El fallo, que no puede ser apelado, obliga a Colombia a 23 tareas. Entre otras, a reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos y a pagar una indemnización de 6,5 millones de dólares—más de 16 mil millones de pesos— a los familiares de las víctimas (ver nota anexa).

La condena es histórica porque por primera vez un tribunal internacional le pasa al Estado colombiano una cuenta de cobro por avalar "la creación y fortalecimiento" de grupos de autodefensas en la década de los 80.

Según el fallo de la Corte, para la época de la masacre estaba vigente el decreto 3398 de 1985 con el cual "el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas de uso privativo de las Fuerzas Armadas".

Y, de acuerdo con la sentencia—ese apoyo lo recibió la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acogeam), que "utilizaban como fachada" los paramilitares que participaron en la matanza.

El tribunal comprobó además que el grupo de autodefensas que operaba en el Magdalena Medio "actuaba con la colaboración y apoyo de diversas autoridades militares de los Batallones de dicha zona. Los 'paramilitares' contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de éstas".

La Corte obliga al Estado colombiano a cumplir con 23 tareas.

¿Cómo fue?

La masacre de los comerciantes fue en su momento el anuncio de un rosario de muertes colectivas que se extendería por el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá (Pueblo Bello, Punta Coquitos, Honduras, La Negra, El Tomate, Mejor Esquina, y Segovia) a manos de paramilitares.

Solo en 1989, y luego de la matanza de una comisión judicial en la Rochela (Santander), el Gobierno declaró ilegales a las autodefensas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de la OEA, tiene sede en Costa Rica, y ya condenó en otras dos oportunidades a Colombia: en 1994, por la desaparición de Isidro Caballero y María del Carmen Santana, y en el

LA CORTE INTERAMERICANA estableció en su fallo que el Estado colombiano, en el momento de los hechos, amparaba y apoyaba a los grupos paramilitares.

LO QUE ORDENA LA SENTENCIA

Reabrir investigación. Para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de la masacre.

Buscar los restos de las víctimas. En un plazo razonable y entregarlos a sus familiares.

Pagar indemnizaciones. 50.000 dólares a cada uno de los hijos de las víctimas; 80.000 dólares a cada una de las cónyuges y compañeras; 50.000 dólares a cada uno de los padres; 55.000 dólares por concepto de los ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, y 8.500 dólares a cada uno de los hermanos de las víctimas.

Pago a abogados. 10.000 dólares por concepto de costas y gastos a la Comisión Colombiana de Juristas y 3.000 dólares al Centro por la Jus-

ticia y el Derecho Internacional (Cejil).

La responsabilidad internacional. Realizar un acto público, con presencia de los familiares, para aceptar la responsabilidad estatal y realizar un acto de desagravio.

Para que el país no olvide. Erigir un monumento y poner una placa con los nombres de las víctimas.

Protección a menores. Consignar la indemnización de los menores de edad en una inversión bancaria en dólares dentro del plazo de un año.

Atención médica. Tratamiento médico y psicológico gratuito a los familiares de las víctimas de la masacre.

2002, por la ejecución extrajudicial de siete campesinos a manos de miembros de la Policía en Putumayo, conocido como el 'caso Palmeras'.

La masacre de los comerciantes ocurrió en una finca del corregimiento Cimitarra, zona rural de Puerto Boyacá. Eran 18 en total que se dedicaban a transportar electrodomésticos de Cúcuta a Ocaña y de ahí a Medellín.

En esa oportunidad, llevaban mercancías por cerca de 70 millones de pesos, era el octavo viaje que hacían y salieron de Ocaña el 4 de octubre en cinco vehículos, incluido un camión, un taxi y dos "camperos".

Uno de los comerciantes de la caravana, que se quedó haciendo una diligencia en el camino con el propósito de alcanzarlos más tarde, fue el que disparó las alarmas sobre la desaparición. Sus compañeros de viaje no llegaron a Medellín como estaba previsto.

Después se supo que el 6 de octubre un grupo de paramilitares había detenido y asesinado a 17 de ellos, al parecer por no pagarles el 'impuesto' para poder transportar las mercancías y porque los señalaban de vender armas a las Farc.

Sus cuerpos fueron desmenuzados y lanzados al caño El Ermitaño, afluente del río Magdalena, en el sitio 'Palo mango'.

Los familiares de una de las víctimas viajaron a Puerto Boyacá dos días después de su desaparición averiguando por ellos. Allí contactaron a Henry Pérez, quien con su papá, Gonzalo, había fundado las autodefensas y él les reconoció ser el comandante 'para' de la zona, pero negó saber nada de

sus allegados y les ordenó que salieran de la región.

Quince días después de los hechos, Juan Alberto Montero Fuentes—familiar de una de las víctimas— y José Ferny Fernández Díaz, que buscaban a la caravana de comerciantes también fueron asesinados por los paramilitares.

El Juzgado Único Especializado de San Gil señaló a los Pérez como los autores intelectuales de la masacre, sin embargo todas las acciones legales cesaron tras la muerte de ambos en 1991.

Justicia 'se rajó'

Precisamente, la Corte Interamericana dice que las actuaciones de la justicia colombiana para esclarecer los hechos no fueron "satisfactorias", pues transcurridos 17 años de la masacre aún no se han condenado a todos los autores materiales.

Señala el fallo que en el caso de los 17 primeros comerciantes solo han cinco civiles condenados (Marceliano Panesso Ocampo, Waldo Patiño García y el fallecido Nelson Lesmes Leguizamón, por homicidio; y Carlos Alberto Yepes Londoño y Diego Viáfara Salinas como cómplices). Mientras que en el caso los otros dos comerciantes muertos solo fue condenado Alonso Baquero Agudelo, conocido como 'Vladimir', por el delito de secuestro.

La Corte hace un fuerte llamado de atención a la Justicia

Penal Militar en los casos de violaciones de derechos humanos.

En el caso de la muerte de los 19 comerciantes fueron vinculados a la investigación el general (r) Farouk Yanine Díaz, entonces comandante de la Brigada XIV del Ejército; el Teniente Coronel (r) Hernando Navas Rubio, el Mayor (r) Oscar de Jesús Echandia Sánchez y el Sargento (r) Otoniel Hernández Arciniegas.

Sin embargo, el 17 de marzo de 1998 el Tribunal Superior Militar cesó cualquier acción judicial contra los militares por no hallar pruebas de su participación en los hechos.

La Corte consideró que la intervención de la Justicia Penal Militar "implicó una violación al principio de juez natural y, consecuentemente, al derecho al debido proceso y acceso a la justicia, y además conllevó a que no fueran investigados y sancionados por tribunales competentes los miembros de la fuerza pública que participaron en los hechos".

El fallo fue expedido en San José de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aprobado por unanimidad por los magistrados Alirio Abreu Burelli, Oliver Jackman, Antonio A. Cancado Trindade, Cecilia Medina Quiroga, Manuel E. Ventura Robles y Ernesto Rey Cantor, este último, colombiano, actuó como juez ad hoc.